

pueda haberse convertido en una restriccion onerosa en el comercio de Estado á Estado.

Considerando: que tampoco existe violacion alguna de las garantias consignadas en los artículos 1º y 16 de la Constitucion de la República. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma Constitucion, se decreta:

1º Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora en 13 de Junio del año pasado, que declaró haber lugar al amparo Federal en el presente caso.

2º La Justicia de la Union, no ampara ni protege á los Señores Sandoval y Bülle, contra el cobro de 30 pesos con mas el 25 por ciento federal que les hace el C. Administrador de Rentas de Guaymas, por derechos de introduccion sobre 250 fanegas de maíz procedentes de Mazatlan.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 9 de Junio de 1875.—*Enrique Landa*, Oficial Mayor.

JUICIO

Seguido en el Juzgado de Distrito de Chihuahua, contra la casa Gonzalez Treviño y Cª del comercio de esta ciudad, por introduccion, sin los documentos respectivos, de dos bullos de ropa procedentes de Montercy.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

En Chihuahua, á las nueve de la mañana del día 28 del corriente mes Junio, comparecieron los Sres. Promotor fiscal, Jefe superior de Hacienda, y José Treviño, con su patron Lic. D. Antonio Jáques y el Sr. Jefe de Hacienda, expuso: que estando encargado de una manera domaciado provisional de la Jefatura de Hacienda, y no habiendo recibido instruccion ninguna del jefe de la citada oficina, C. Buenaventura Gandarillas, relativas á este negocio, y con el conocimiento que tengo del mismo, pido al Juzgado: que para seguridad de los intereses federales, se sirva mandar, que la casa del Sr. D. Jesus Gonzalez Treviño, otorgue la fianza respectiva, de la cantidad de que se trata, á reserva de que pueda justificar tan luego como se espelita la via de comunicacion con Montercy, que las mercancías de que se trata, han sido sacadas de aquel lugar, ó introducidas á este Estado legalmente. El C. Promotor fiscal, dijo: que á nombre de la Hacienda pública, cuyo derecho representa en este acto, demanda á la casa de comercio "Jesus Gonzalez Treviño," por la introduccion clandestina y sin documentos, de los efectos extranjeros que constan en la factura de fs. 10, segun el parte que dió con fecha 22 de Febrero próximo pasado, la agencia auxiliar de hacienda, de la Villa Coronado, y por lo mismo, suplica al Juzgado, se sirva fallar, que dichos efectos han incurrido en la pena que impone la fraccion 2ª del art. 26 del Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas, y demas disposiciones relativas, decretándose, así mismo, el

aflanzamiento que ha pedido el actual encargado de la Jefatura de Hacienda, y reservándose á pedir lo conveniente á los derechos del fisco, por lo que toca al tren en que vinieron las mercancías. El Sr. D. José Treviño, por conducto de su patrono el C. Lic. Antonio Jáques, expuso: que no cree encontrarse en el caso del artículo 61 de la ley de 28 de Diciembre de 48, por las razones siguientes:

1º Porque en dicho artículo se trata de las introducciones clandestinas, en que no puede hacerse la aprehension real de los efectos, y en nuestro caso, está muy lejos de haberse aún intentado una introducción clandestina; por el contrario, como los antes consta bien probado, que las mercancías de que se trata, desde el primer punto que tocaron en el Estado, se presentaron al empleado auxiliar de la Jefatura de Hacienda, para que fueran revisadas; que lo mismo sucedió en los demás puntos que tocaron hasta llegar á esta Ciudad, que era su final destino, en donde tambien fueron presentadas á los empleados y autoridades que mal ó bien, estaban encargados de hacer dicha revision, y que estas dieron por buena y legal la introduccion de dichos efectos, con la condicion de que se presentase por mí un certificado de que dichas mercancías habian sido introducidas á Monterey, ántes de que aquel Estado se pronunciara en contra del Gobierno General, legitimamente constituido, y que habiendo cumplido con este requisito, no creía tener que ocuparse mas de este asunto, porque si alguna responsabilidad habia que exigir, debia ser á la autoridad y empleados que dieron por buena y legal la referida introduccion: que en consecuencia de lo expuesto, se vé con mucha claridad, que no hubo ni aun intento, como queda dicho, de hacer introduccion clandestina, porque el que tal intenta, no se presenta á todos los empleados de hacienda del tránsito y á las de su final destino; que por lo mismo, si se consideraron ilegalmente introducidas las mercancías de que se

COMO VII.—PARTE II.

trata, y no se hizo la aprehension real de ellas, de ninguna manera puede ser culpable el que habla, de esta omision:

2º Porque conviniendo encontrarme en el caso del artículo 61 citado, seria tanto como convenir, en que los remitantes de los efectos, el hetero que los conducía, y casa que los recibió, habian cometido un delito, y que, como he dicho antes, ni se ha probado que hubo tal intento, por las razones que ya he indicado y que con mas estension haré valer cuando corresponda:

3º Porque las mercancías de que se trata, no fueron remitidas de ningun punto donde haya establecida Aduana Fronteriza, ni de un punto fronterizo, propiamente dicho, por lo que puede asegurarse que estaba en el comercio interior de la República, en cuyo caso, no son necesarios todos los documentos que en este caso se exigen. Por todas estas razones no pudo ser conforme con el auto del Juzgado, fecha 26 del presente mes, y apeló de él en toda forma, sin perjuicio de que como comerciante de buena fé, y dispuesto á probar siempre, en obsequio del buen nombre de la casa que representa, y el mio propio, no tengo inconveniente en presentar tan luego como se restablezcan las comunicaciones oficiales con Monterey, todos los documentos que acreditan la legal introduccion de dichas mercancías. El señor Promotor manifestó, en lo relativo al auto de 26 del presente mes: que tratándose de un juicio sumario, como es el de comiso, y de una providencia que no admite recurso, como es la que manda abrir el juicio verbal, en el que las partes pueden hacer valer sus derechos y justificar sus acciones y excepciones respectivamente, cree que no procede la apelacion interpuesta, y que la parte demandada debe contestar sobre lo principal, que él ya ha tocado extensamente en su anterior exposicion; que por lo expuesto pide al Juzgado se sirva resolver en el sentido que deja indicado, dictando en lo principal, la providencia que corresponda. El Señor Treviño, por conducto de su abogado repli-

có: que es un principio reconocido en derecho, de que todas las resoluciones, ya sean definitivas ó interventorias, que traen gravámen irreparable á las partes, son apelables, y que la que contiene el auto del 26 del presente mes, no solo lo trae á los intereses, sino aun á el honor del remitente, del fletero y de la casa que recibió dichas mercancías; porque dicho auto dá por sentado, que se ha cometido un delito por las personas indicadas: que á mas de esto, el trae auto repetido, gravámen irreparable, porque sin él, el procedimiento no debía ser sino en juicio verbal, como ahora está dispuesto que se haga, en el cual, las defensas ó exposiciones de las partes, por su propio carácter, no pueden esponderse ni probarse con la estension y meditación debida, y por último, es tambien irreparable el perjuicio que trae dicho auto, porque en el juicio verbal no se dan los recursos á las partes, que en el escrito aunque sea sumario: que por lo mismo insiste en la apelacion que tiene interpuesta. El promotor contestó: que el auto de 26 del actual, lejos de causar un gravámen irreparable á la casa del Sr. Treviño, atacando su interés y su honor como se ha dicho anteriormente, es favorable á dicha casa, en razon de que abre la única puerta que hay, para justificar en debida forma su inocencia y rectitud en el presente negocio: que el repetido auto no ha venido á privar de la garantía natural, respecto á la forma del juicio, porque conforme á la ley de 28 de Diciembre de 1843, que es la vigente en estos procedimientos: *Los juicios de comiso se sustanciarán en público, y verbalmente, estendiéndose á satisfaccion de los partes, una acta en que conste, especialmente, el debate judicial.* Así es que cualquiera que sea la cuantía del negocio de que se trata, se sustanciará en juicio verbal, sin mas diferencia, que los recursos á que dá lugar la sentencia definitiva. Que por estas razones insiste en su anterior pedimento, suplicando al Juzgado se sirva resolver como lo tiene solicitado. El C. Juez dispuso: quedasen citadas las partes, para

las once de la mañana, á oír la resolucion que deba recaer. Con lo que se concluyó esta acta, que firmaron, en union del C. Juez, por ante mí: doy fé.—*Hierro*, una rúbrica.—*Licenciado Antonio Jáquez*, una rúbrica.—*Francisco N. Ramos*, una rúbrica.—*José Gonzalez Treviño*, una rúbrica.—*P. N. del C. Jefe*.—*Felipe Siqueiros*, (hijo,) una rúbrica.—*Perez*, una rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Chihuahua, Marzo 8 de 1873.—Vista la comunicacion que con fecha 27 de Mayo del año próximo pasado de 1872, dirigió á este de mi cargo, la Jefatura superior de Hacienda, con la que remitió á este mismo, el expediente relativo á la introduccion en el Estado, con direccion á esta ciudad, de tres carretones, en los que entre otros efectos, vinieron setenta y dos bultos de ropa, que la casa de comercio Zambrano de Monterey, consigna á la del C. Gonzalez Treviño de esta plaza. Visto el expediente á que se refiere la anterior comunicacion; la demanda que en nombre del Fisco entabló el C. Promotor fiscal, contra la repetida casa de Gonzalez Treviño; la contestacion del demandado, las réplicas y súplicas de ambas partes; las pruebas rendidas; sus respectivos alegatos, y todo lo demas que debió verse, de autos consta y ver convino. Resultando:

1º Que en 19 de Febrero del año próximo pasado de 1872, el C. Guillermo García pasó por Villa Coronado con un tren de trece carretones, en los cuales introdujo con destino á esta capital, setenta y dos bultos de ropa, veinte tercios café y treinta cargas de piloncillo, sin documento de ninguna especie, habiendo manifestado á la agencia auxiliar de aquella Villa, que los correspondientes documentos estaban en esta ciudad.

2º Por disposicion de la Superior Jefatura de Hacienda, la repetida agencia auxiliar de Villa Coronado, informa, que los

objetos introducidos proceden de la casa de comercio de Zambrano Hermano y C^{as}, establecida en Monterey, los que vinieron consignados á la casa mercantil del C. Jesus Gonzalez Treviño, de esta ciudad.

3^o Teniendo noticia la Jefatura de Hacienda de la introduccion referida, hizo formal denuncia de ella ante este Juzgado, el que procedió en el acto á la correspondiente averiguacion.

Resultando: que en término probatorio que se concedió á la casa de Gonzalez Treviño, ha presentado como pruebas, 1^o un certificado del Alcalde 1^o de Monterey C. Tomás Hinojosa, expedido en aquella ciudad en 2 de Junio del año próximo pasado, cuyo documento está legalizado en aquella misma poblacion á los 24 dias del mes de Diciembre de 1872, por los Escribanos públicos CC. Crescencio Pacheco y J. Garcia del Corral; 2^o otro certificado del C. Eustaquio Benites Mondragon, recaudador de rentas y contribuciones directas de la Villa de Allende (Chihuahua) expedido en dicha Villa á los 22 dias del mes de Febrero del año próximo pasado de 1872: 3^o un tercer certificado expedido por el C. Luis Terrazas, Gobernador de este Estado, á los 18 dias del mes de Noviembre del propio año próximo pasado de 1872: 4^o y último, una certificación del C. Juan Muñoz, Administrador general de rentas de este Estado, expedido en esta, á los 21 dias del mes de Noviembre de 1872.

Considerando: que la Suprema circular de 30 de Noviembre de 1871, dice: "El Ejecutivo federal ha declarado, en diferentes resoluciones y circulares, conforme á sus atribuciones, y por la obligacion en que está de hacer cumplir las leyes, que ningunos derechos fiscales, ni prestaciones de valores, pagados á los sublevados, puedan surtir los efectos de libertar á los causantes, de sus obligaciones pecuniarias hácia las autoridades legítimas.

En consecuencia de este principio, el Presidente ha acordado se prevenga á las Adua-

nas y Jefaturas de Hacienda respectivas, y se circule para conocimiento de todos los funcionarios públicos, y los habitantes de la Nacion en general, que siendo, como son nulas y de ningun efecto legal, las disposiciones tomadas por el Jefe de las fuerzas sublevadas de Nuevo Leon, respecto del comercio, aranceles en la frontera y cesacion del contrabando, todas las mercancías que de dicha frontera se internen, quedan sujetas al pago de los derechos del arancel general vigente, los cuales deben exigirse, luego que se encuentren por los agentes federales, tanto civiles, como militares, si pasaren dichas mercancías de los puntos en que se hallen los sediciosos, y en cualquier tiempo, luego que restablecido el imperio de la ley, tengan conocimiento de la defraudacion, las autoridades constituidas.

Tambien se ha servido prevenir el Presidente, para evitar que el contrabando destruya el comercio de buena fé, que ningun cargamento de efectos extranjeros, pueda transitar de Nuevo Leon al interior, sin permiso expreso, dado por escrito por esta secretaría, que contenga las circunstancias debidas, respecto de procedencia, pago de derechos y calidad de ellos, el cual seria comunicado al Jefe militar de la linea respectiva para su conocimiento, y al empleado que esta secretaría nombre en comision, para inspeccionar la ejecucion de lo que se determine, en concepto de que, toda introduccion de efectos que proceda de cualquier punto ocupado por los revolucionarios, sin el requisito antes señalado, se considerará como fraudulenta, aplicándose, en consecuencia, las penas que para el caso señalan las leyes, y teniendo presentes, como especiales, los arts. 63 y 64 del Reglamento de contrabando de la frontera del Norte, de 4 de Junio de 1870."

Considerando: que tanto por el informe rendido en 3 de Marzo de 1872, por la agencia auxiliar de Villa Coronado (Chihuahua,) como por la denuncia hecha por la Jefatura de Hacienda, y finalmente, por

la confesion misma del demandado, los efectos, objeto del presente juicio, proceden de la casa de comercio de Zambrano Hermano y C^{ia} establecida en Monterrey.

Considerando: que la ley transitoria de 15 de Agosto del año próximo pasado de 1872, puso en vigor el Código de procedimientos, promulgado por el Supremo poder Ejecutivo de la Nacion, en 9 de Diciembre de 1871: que dicho Código en su art. 592, así como la ley de 4 de Mayo de 1857 y la de 9 de Octubre de 1812, lo mismo que las leyes 23 y 27 tit. 16 part. 3^a, previene que las pruebas se rindan, previa citacion de la parte contraria, exceptuándose la confesion, el reconocimiento de los libros y papeles de los mismos litigantes, y los instrumentos públicos, conforme al art. 726 del propio Código: que éste, en su art. 660, declara instrumentos públicos: 1^o las escritura públicas, otorgadas con arreglo á derecho: 2^o los documentos expedidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

Considerando: que las pruebas presentadas por el C. Jesus Gonzalez Treviño, no fueron rendidas previa citacion de la parte contraria, que en el caso lo son tanto el C. Promotor fiscal, como el Jefe Superior de Hacienda; que los certificados expedidos por el C. Gobernador de Estado y Administrador General de Rentas del mismo, aunque muy respetables y dignos de tomarse en consideracion, sin embargo, ante la ley no tienen toda la fuerza y legal valor que debieran, en virtud de que no han sido expedidos por aquellos funcionarios, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, requisito indispensable para que hagan fé en juicio, (art. 660 del Código de Procedimientos;) que el certificado que obra á fs. 12, tampoco merece fé, porque está expedido por quien absolutamente carece ante la ley, de facultades para certificar, así como para expedir certificaciones fehacientes, y en caso de que se presenten documentos de aquella naturaleza, la ley no les concede fuerza al-

guna probatoria, ni valor alguno jurídico.

Considerando: que aún en el supuesto de que las pruebas rendidas no tuvieran los defectos de que adolecen, sin embargo, ellas no prueban la legal procedencia de los efectos introducidos, pues aquellas se reducen á demostrar, 1^o el certificado que obra á fs. 44 frente, que el C. Jesus Gonzalez Treviño, presentó ante el certificante una carta de envío que cubria los efectos que se introdujeron: que expresó aquel Sr. (Treviño) que los setenta y cinco bultos de ropa, eran existencias que tenía en su casa antes del 15 de Setiembre de 1871, rindiendo las pruebas necesarias, de manera que esta autoridad (el Sr. Alcalde 1^o de Monterrey) puede certificar al calce de la misma carta, que las mercancías que ella cubria, eran de buena procedencia y habían pagado los derechos de importacion.

Considerando: que como no se dice que clase de pruebas rindió la casa de Gonzalez Treviño, ni se remitiéron aquellas, á fin de estimar su valor legal: que aún en el nuevo supuesto de que dichas pruebas hubieran sido rendidas con todos los requisitos de la ley, y así lo certificase el alcalde mencionado, aún en este caso no harían fé, porque dicho funcionario certifica acerca de actos que no son de su resorte, espidiendo documento en lo que no se refiere al ejercicio de sus funciones, en contravencion á lo que previene el Código de que se ha hecho mérito.

Considerando: que el certificado de fs. 45 frente, se refiere también á que el C. Jesus Gonzalez Treviño presentó una carta, en la cual se expresaba, que los efectos, materia del presente juicio, habían sido introducidos á la plaza de Monterrey, antes del 15 de Setiembre de 1871: que aquella autoridad (el Recaudador de rentas y contribuciones directas de Allende), no certifica que los efectos fueron introducidos antes del 15 de Setiembre de 1871, sino solo á fs. de que el C. Gonzalez Treviño manifestó una carta, en la cual se expresaba, que la repetida introduccion fué hecha antes del repe-

tido 15 de Setiembre de 1871: que aunque se dice que la carta de envío fué certificada por la primera autoridad de Monterrey, que es de suponerse haya sido el Gobernador de aquel Estado, sin embargo, como no se expresa cual fue aquella autoridad, no puede, ni debe calificarse el valor legal de dicha certificación, y si fué la que se presume, la repetida certificación se encuentra en el mismo caso que la anterior, y por lo tanto no hace fé.

Considerando: que el C. Gobernador del Estado, certifica á f. 46 frente, que habiéndose presentado el C. Jesus González Treviño, con el objeto de hacer la introducción de que trata, le previno que tenía que probar que dichas mercancías habían sido introducidas á Monterrey, antes del pronunciamiento, y así lo ejecutó, comprobando legalmente, que los efectos extranjeros habían sido introducidos antes del repetido pronunciamiento de 15 de Setiembre de 1871, y pagados todos los derechos.

Considerando: que como no se expresa por el certificado, que clase de pruebas rindió el C. Jesus González Treviño, ni que comprobantes presentó, no se pueden ni deben estimar el valor jurídico de unos y otros, y por lo mismo, el referido certificado no constituye prueba, ni mucho menos si se atiende á que adolece de los defectos de que se ha hecho mención.

Considerando: que encontrándose en el propio caso el certificado que obra á fojas 47 frente, por lo mismo carece de fuerza alguna probatoria.

Considerando: que las certificaciones que obran en este expediente, versan sobre actos propios y exclusivos del resorte de las oficinas de las Rentas Federales, al ser expedidas ellas, por los funcionarios que las suscriben, estos no han obrado conforme á lo prevenido por el artículo 660, fracción 2ª del Código de Procedimientos, y por lo mismo, las mencionadas certificaciones no pueden constituir una prueba.

Considerando: que por las pruebas rendi-

das, la casa de González Treviño de este comercio, á quien fueron consignados los efectos introducidos, no ha justificado legalmente, su buena procedencia que la propia casa de Treviño no ha prestado el permiso que previene la Suprema circular de 20 de Octubre de 1871, tratándose de introducciones de efectos, procedentes de Nuevo Leon, ó cualquier punto ocupado por los revolucionarios: que esta misma circular considera como fraudulenta toda introducción que proceda de los puntos que ella misma expresa, sino se cumple con el requisito que también ella exige, que la repetida circular dispone, que cuando no se cumpla con lo que ella manda, se apliquen las penas que señalan las leyes: que la misma ha venido á establecer un nuevo caso de fraude.

Considerando: que la Suprema circular de 7 de Diciembre de 1871 dispone:

Artículo 1º No se considerará legal la internación que pretenda hacerse de efectos extranjeros, procedentes de lugares ocupados por los rebeldes, sino en el caso de que hayan sido despachados en fecha anterior, á la en que se hayan sustraído aquellos de la obediencia de las autoridades federales.

2º Las mercancías que se dirijan de la Frontera ó de los puertos, deben ser acompañados con los documentos correspondientes, expedidos por los empleados federales, que hicieron el despacho en las Aduanas Fronterizas.

3º No es permitido el envío de caudales á los puertos ocupados por los sediciosos.

4º Cualquiera cargamento que sea aprehendido, por haber infringido sus conductores las prevenciones precedentes, será puesto á disposición del Juzgado de Distrito respectivo, quien juzgará sumariamente el hecho, imponiendo la pena que para el caso de contrabando determinan las leyes.

Considerando: que la pena establecida por el artículo anterior de la circular citada, se ha de imponer, á las mercancías que se di-

rijan de la Frontera, ó de los Puertos, sin ser acompañadas con los documentos correspondientes, expedidos por los empleados federales que hicieren el despacho en las Aduanas respectivas: que este requisito se ha de exigir á las mercancías que vinieren de la Frontera ó puertos sometidos al orden constitucional, y no á las que se dirigieren de la frontera, ó puertos sustraídos á la obediencia del Gobierno general; porque malamente podrían exigirse documentos expedidos por empleados federales, á las mercancías que vinieren de lugares donde no había aquellos funcionarios, como sucedería tratándose de lugares ocupados por los pronunciados: que por lo mismo, la introducción de que se trata, no está comprendida en el artículo 4º de la circular de 7 de Diciembre de 1871.

Considerando: que el pronunciamiento de Monterey tuvo lugar el 15 de Setiembre de 1871: que la casa de Gonzalez Treviño ha confusado que la introducción de que se trata, es de efectos procedentes de la casa mercantil de Zambrano hermano y Compañía, establecida en Monterey: que la referida casa de Gonzalez Treviño no ha justificado que su introducción la hizo con anterioridad á la fecha en que la Ciudad de Monterey se sustrajo de la obediencia de las autoridades federales, y por lo mismo, dicha introducción no es legal, según el artículo 1º de la repetida circular de 7 de Diciembre de 1871, y por esta razón ha incurrido en la pena que establece la circular de 30 de Octubre de 1871.

Considerando: que el arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas de 31 de Enero de 56, en el art. 27 § 4º, impone á los defraudadores comprendidos en la parte 4ª del art. 24 del mismo, la pena de pagar dobles los derechos de importación, internación y consumo: que el mismo arancel, en el § 29 parte 1ª previene; que los juicios de contrabando, fraude, y aún los de la falta de observancia, se seguirán por los Tribunales de Justicia, establecidos en el

país, hasta su última instancia, observando estos, con arreglo á lo prevenido en los arts. relativos de esta Ordenanza; mas cuando se presente un caso que sea diverso de los que se especifican, se aplicarán, por analogía, las penas, imponiéndose siempre, la mas suave y menos molesta al comercio. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos de 9 de Diciembre de 1871, arts. 592 y 776; leyes de 4 de Mayo de 1857; 9 de Diciembre de 1872; 23 y 27, tít. 16 Pª 3ª y circulares de 30 de Octubre de 1871, y 7 de Diciembre del mismo, el C. presente Juez dijo: que en nombre de los Supremos Poderes de la Union, debía de fallar y falla;

1º Los efectos extranjeros, que procedentes de la Ciudad de Monterey, introdujo á este Estado la casa Mercantil del C. Jesus Gonzalez Treviño, el día 19 de Febrero del año próximo pasado de 72, pagarán dobles los derechos de importación que se causaren; conforme al Arancel de Aduanas Marítimas y fronterizas de la Republica de 11 de Enero de 1856.

2º Notifíquese esta sentencia; sáquense las copias de estilo y háganse las publicaciones de ley, remitiéndose este expediente al Superior, para su revisión. Así lo proveyó y firmó el Juez, por ante mí. Day fé —*Luis Bárcena*, una rúbrica— *A. E. Perez*, una rúbrica.

Pedimento del C. Promotor Fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado del Tribunal de Circuito.

El C. Jefe Superior de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal dice: que por las circunstancias que obran en estos autos y las pruebas presentadas en 1ª instancia, la sentencia del inferior fué pronunciada con arreglo á las leyes de la materia.

No cabe duda en que el 19 de Febrero de 1872, (folio 1º) el Sr. D. Guillermo

García pasó de Monterey para Chihuahua por la Villa de Coronado con 72 bultos de ropa, además de otros efectos de abarrotes y sin ningún documento que cubriera la carga. Por solo este hecho, la introducción de los efectos extranjeros debería considerarse como fraudulenta, según las supremas circulares de 20 de Octubre y 30 de Noviembre de 1871, arts. 1º y 4º de la ley de 7 de Diciembre del mismo año, frac. 5ª del art. 63 y 64 del Reglamento del Contrabando de la frontera del Norte, fecha 4 de Junio de 1870.

Las pruebas rendidas en 1ª instancia carecen en efecto de todo el valor jurídico que deberan merecer, si los certificados de fojas 41 á 47, hubiesen sido expedidos por funcionarios de la Federacion, á cuya incumbencia corresponden esa clase de certificaciones. Puesto que las autoridades que suscribieron esos certificados, no eran competentes para expedirlos sobre la materia de que se trata, con objeto que hiciesen fé en juicio, debieron rendirse las pruebas con el caracter de declaraciones verbales ó por escrito, según la categoría de la autoridad y previa citación de las partes.

Con la omisión de estos requisitos no pudo el Juez de 1ª instancia considerar las pruebas de que se trata; con todo el valor que en derecho se requiere para fundar en ellas la sentencia definitiva de un juicio tan interesante como el presente. No pudo el Juzgado considerar como probada la legal procedencia de los efectos, porque en 1ª instancia no aparecieron ningunos documentos fehacientes sobre el hecho de haber tenido lugar la introducción de ellos á Monterey en tiempo de las autoridades legítimas; es decir, antes del 15 de Setiembre que se efectuó el movimiento revolucionario. Este es el fundamento mas sólido en que apoyó su sentencia el C. Juez de Distrito, y es evidente que las constancias de autos así lo exigen.

En consecuencia de lo espuesto, desaparece en concepto del que suscribe el funda-

mento de los agravios de que hace mérito el apoderado del Sr. Gonzalez Treviño en su escrito relativo que corre en estos autos, fojas 121 á 124.

Al presentarse la carga sin documento ninguno que la cubra, debe considerarse culpable el conductor ó el remitente, según el Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas, (fecha 31 de Enero de 1856,) pauta de comisos; 28 de Diciembre de 1843 y muy diversas disposiciones de la materia.

Y una vez apareciendo culpable por solo el hecho de caminar con una carga sin documentos que la cubran, á ese culpable es á quien incumbe la prueba de su inocencia, so pena de ser juzgado conforme á su culpa. Luego no se intirió el primer agravio.

El segundo de que se queja la parte, desaparece tambien con las razones espuestas; en virtud de las cuales no podian considerarse las pruebas rendidas en 1ª instancia, con toda la fuerza indispensable en derecho para fundar una sentencia.

El tercer agravio que manifiesta, se funda en que se le aplicaron disposiciones no publicadas ni conocidas en Monterey. Es muy posible que las supremas circulares de 26 de Setiembre, 20 de Octubre, 20 de Noviembre y ley de 7 de Diciembre de 1871, no se hubiesen promulgado en Monterey; pero aun supuesto eso, sin conceder, por no haber constancias en los autos desaparece el agravio al observar que esas disposiciones son algunas y no las únicas en que la sentencia se apoya. Se funda así mismo en el Código de Procedimientos, y tanto la parte fiscal como las demas, lo invocan en su apoyo; pero en concepto del autor de este dictamen, no está vigente para los Tribunales de la Federacion, sino para el Distrito Federal y la Baja California, según la suprema circular de 15 de Agosto de 1872.

Analizados ya aunque ligeramente como lo estan, los fundamentos de la sentencia de 1ª instancia y sentadas las razones de que por las constancias de autos no pudo ni debió expedirse en otro sentido; pasa es-

te dictamen fiscal, á ocuparse de los nuevos recaudos que en la 2ª instancia se han presentado por la parte del Sr. Gonzalez Treviño.

Queda dicho y se vé en la sentencia de 1ª instancia, que los principales fundamentos de esta, son: la fórmula bajo la cual se presentaron las pruebas del Sr. Gonzalez Treviño en dicha instancia: certificados de autoridades sobre funciones que no ejercían, en vez de depósitos en forma de declaración y con previa citación de la parte fiscal. Este requisito que en aquella instancia se omitió está cumplimentado en la segunda previa citación fiscal.

Obran en el cuaderno 2º, folios 4, la ratificación hecha en debida forma por el C. Tomás Hinojosa, Alcalde 1º de Monterrey, y su secretario C. Serapio Carlos, sobre el contenido del certificado, folios 44 del cuaderno principal.

A folios 8 del mismo cuaderno 2º, obra la declaración del C. Luis Terrazas, reconociendo su firma y ratificando los hechos que constan en el certificado que como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua expidió en 18 de Noviembre de 1872, cuyo certificado es el de folios 46 del cuaderno principal. Y en la misma folia 8 vta. del cuaderno 2º, aparece el C. Juan Muñoz, Administrador General de rentas de Chihuahua, suscribiendo una declaración en la cual reconoce su firma y ratifica el contenido del certificado, folios 47 del cuaderno principal que expidió en 21 de Noviembre citado.

Cumplimentados pues, los requisitos que se han referido, desaparece el fundamento sobre la fórmula de pruebas presentadas en 1ª instancia, y deben dichas pruebas tenerse por válidas en la 2ª instancia, supuesto que han sido presentadas en tiempo hábil, previa citación fiscal y con todos los requisitos que establecen los principios generales del derecho para que las pruebas sean admitidas.

Sin embargo de todos los razonamientos

expuestos, todavía los documentos referidos no serian bastantes á juicio del que lleva la voz fiscal para conformarse con ellos respecto á la legal procedencia de los efectos. Ninguno de esos documentos es la constancia fehaciente de haber tenido lugar la introducción á Monterrey, antes del 15 de Setiembre de 1871 que dejaron de funcionar las autoridades legítimas, pues aunque se refiere, que la introducción de los efectos fué anterior á la fecha expresada, y que los interesados la probaron debidamente, no se vió en 1ª instancia, ni se vé en los documentos de que se hace mención, el justificante legal que aleje toda duda sobre la procedencia de los efectos; pero además de los referidos documentos, se han presentado en 2ª instancia, otros que obran á folios 118, 119 y 120, los cuales prueban suficientemente la legal procedencia de los efectos de que se trata.

El C. Rafael del Valle, Jefe del Contrarresguardo de la Frontera del Norte y el C. Juan Peña, interventor del mismo Contrarresguardo certifican que los efectos constantes en la factura de folios 119, que es la misma de los efectos que pasaron por Villa Coronado en 19 de Febrero de 1872, existían todos en la casa de los Sres. Zambrano Hermanos y Cª de Monterrey, á excepción de un tercio de rayadillo y dos de mesclilla en 20 de Noviembre de 1870, según la manifestación que en ésta última fecha presentaron los mismos Sres. al cumplimentar una disposición dictada por la Comandancia del Contrarresguardo; el día 5 del propio mes.

A folios 120 corre agregada la legalización en toda forma del documento de que se trata, suscrita por los Escribanos Públicos CC. T. Crescencio Pacheco y J. Garcia del Corral. Dicho documento ha sido expedido por autoridad legítima en debida forma y con relación al ejercicio de sus funciones, por cuyo motivo es de los que producen plena fe en juicio, resultando en consecuencia, que los efectos introducidos á Chihuahua

por el Sr. Gonzalez Treviño en Enero de 1872, proceden de la casa de Zambrano Hermanos y C^{as} de Monterey en la cual existian desde Noviembre de 1870.

En Enero de 1872 que salieron los efectos de Monterey para Chihuahua, habia pasado más de un año contado desde el 20 de Noviembre de 1870 que dichos efectos estaban existentes en la casa de Zambrano Hermanos y C^{as}. Segun el art. 32 de la suprema circular de 26 de Setiembre de 1861, deben tenerse por consumidos los efectos, cuando haya pasado un año de introducidos á una plaza de comercio. En tal virtud, no puede expedirse guia de aquella plaza para otra del interior, amparando efectos introducidos un año antes. Seria pues el caso de considerar aquí la ilegalidad sobre la existencia de los efectos; pero ademas de que en Enero de 1872 que estos salieron de Monterey, no es posible que la citada suprema circular se hubiere allí promulgado, tenemos la constancia fehaciente de que dichos efectos son los mismos que existian en Noviembre de 1870; y habiendo esta constancia tan clara, probablemente no es aplicable la ley, mucho menos cuando no estaba promulgada.

Con fundamento de las razones expuestas y de las leyes que se han referido, el fiscal concluye manifestando al Tribunal de Circuito, que á su juicio y en vista de los recados en 2^a instancia, debe revocarse la sentencia pronunciada por el inferior en 8 de Marzo de 73 y mandarse chancelar la fianza depositaria, otorgada en 13 de Mayo del mismo año por el Sr. D. José María Sanchez encargado de negocios del Sr. D. Jesus Gonzalez Treviño. Pide por tanto al Supremo Magistrado de Circuito, se sirva proveer de conformidad, salvo el caso de que la ilustrada justificacion del Tribunal, tenga en sentido contrario, fundamentos mas sólidos que los manifestados en este dictamen fiscal.

Durango, Mayo 11 de 1874.—Juan Nájera.—Una rúbrica.

TOMO VII—PARTE IV.

Es copia que certifico. Durango, Julio 8 de 1874.—Juan Nájera.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Durango, Junio 29 de 1874.

Vistos los autos instruidos en el Juzgado de Distrito de Chihuahua, por consignacion que le hizo la Jefatura de Hacienda de aquel mismo lugar, del hecho que en concepto de esta oficina estaba en el caso de contrabando, y era el de haber introducido D. Jesus Gonzalez Treviño, una cantidad de mercancías con valor de diez y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos ocho centavos, el 19 de Febrero de 1872, sin que al pasar por la Villa de Coronado fuesen resguardados con algun documento aduanal, siendo procedentes de la ciudad de Monterey, que á la vez se encontraba bajo el dominio de los sublevados contra el orden y la legalidad: visto el fallo definitivo pronunciado por el mencionado funcionario judicial, en el que, haciendo mérito de la legislación fiscal relativa y vigente del año de 48 á la fecha de la sentencia, que es la de 8 de Marzo de 1873, condena á Treviño al pago de dobles derechos: vistos los alegatos de las partes y las pruebas que han rendido tanto en la primera como en esta segunda instancia.

Considerando: que aunque es cierto que al pasar las mercancías por Villa de Coronado, no se exhibió documento alguno que las resguardase, ya en Villa de Allende se exhibió la carta de envío con la que caminaban, y al tocar en la ciudad de Chihuahua, fueron presentadas á la Administracion Principal de Rentas del Estado y al Gobierno del mismo, que por una mera traslacion de sus facultades, se habian abrogado, sin participio alguno de las personas que traficaban, las operaciones oficiales que incumbian á la Jefatura de Hacienda por virtud de la ley, dejando á ésta sin el ejercicio natural de sus funciones.

Considerando: que entre las pruebas rendidas en defensa por parte de Treviño, obra en el cuaderno principal desde la foja 118 á la 120, la certificación del Comandante del contra-resguardo del norte, sobre la confronta que hizo el interventor del mismo, justificando la identidad de las mercancías internadas á Chihuahua, con las comprendidas en la manifestación original hecha por la casa de Zambrano Hermanos y Ca, remitente á la de Treviño, en 20 de Noviembre de 1870, y resultando por consecuencia, que aquellos no fueron importados á la República durante la época de la rebelión, sino mucho antes, con conocimiento de las oficinas de hacienda de la Nación y previo el pago de los derechos aduanales correspondientes.

Considerando: que aunque inmediatamente despues de haberse sublevado las autoridades del Estado de Monterey, en 15 de Setiembre de 1871, se expidieron por el Supremo Gobierno Nacional las disposiciones legales de 26 de Setiembre, 30 de Octubre y 7 de Diciembre del citado año de 1871, represivas del tráfico y comercio fraudulento é imponiendo algunas medidas precautorias para el caso de internacion de mercancías de Monterey á otros puntos de la República, no era posible exigir su esacto y escrupuloso cumplimiento, ni á los remitentes vecinos de Monterey, en donde no se les habia de dar publicacion por los que se habian alzado contra el orden, ni á los consignatarios de Chihuahua, con cuyo Estado estaban interrumpidas las comunicaciones, pues aun poco tiempo despues se obstruyó la de Durango, por haberse turbado aquí tambien la pública tranquilidad: en atencion á los fundamentos desarrollados en el pedimento del ciudadano Jefe de Hacienda en este Estado con su carácter de representante del Ministerio Público, y de conformidad con su conclusion, el Magistrado del Tribunal de Circuito en mérito de lo expuesto y de cuanto mas ver y tener presente convino, especialmente de la prueba rendida en esta segunda

instancia, ha tenido á bien revocar y revoca la sentencia del Juez de Distrito de Chihuahua, que condenó á D. Jesus Gonzalez Treviño al pago de dobles derechos, y por la presente lo absuelve de toda obligacion por el tráfico interior de las mercancías de que se trata, con la sola nota de deber pagar los que causaren un tercio de rayadillo y dos de mezchilla, únicos é insignificantes efectos de comercio que resultaron sin comprenderse en la manifestación de la casa de Zambrano, hecha en 20 de Noviembre de 1870, conforme á la certificación del Comandante del resguardo. El referido Magistrado definitivamente juzgando, así lo dispuso por ante mí de que certifico.—*Benigno Silva*, una íubrica.—*Juan Rivas, Srío.*, una íubrica.

Es cópia que certifico. Durango, Julio 8 de 1874.—*Juan Rivas, Srío.*

Pedimento del C. Procurador general de la Nación

El Procurador General interino dice: que en el presente toca, referente á las diligencias formadas en el Juzgado de Distrito de Chihuahua, en virtud de denuncia de la Jefatura de Hacienda de este Estado contra los Sres. Gonzalez Treviño y Compañía del comercio de dicha Ciudad, por haber introducido á la misma, procedentes de Monterey, setenta y dos bultos de ropa sin los documentos correspondientes, se ha sustanciado, á petición del que suscribo, el artículo de previo y especial pronunciamiento promovido por el Sr. Lic. D. Francisco Gómez del Palacio, representante de la casa Gonzalez Treviño, sobre que se declare no haber sido bien admitido por el Fiscal de Circuito de Durango, el recurso de súplica interpuesto respecto de la sentencia de 2ª instancia por el ciudadano Buenaventura Gondarillas, ex jefe de Hacienda de Chihuahua, en razon de no ser este parte en estos autos, y que se tenga por desierto el referido recurso, y por lo mismo, como ejecutoria la sentencia suplicada, por falta de com-

parecencia ante esta Corte, en el término debido, del supliciente.

En cuanto á lo primero, á si la súplica de que se trata fué bien ó mal admitida, el Procurador dice que no es de la competencia de la Sala el decidirla.

El recurso se juzgó procedente y legal por el único que para ello tenia facultad, por el Tribunal de Circuito de Durango, y ya no puede resolverse sobre este punto que cuenta en abono de su estabilidad, con el apoyo respetable de cosa juzgada. El Legislador para los negocios que se ventilan en los tribunales federales, tiene establecido un remedio en favor de los litigantes, en la ley de 18 de Marzo de 1840, cuando les fueren denegados los recursos de apelacion, súplica y nulidad; pero no ha previsto el caso de lo que deba hacerse; si en concepto de los mismos litigantes fueren mal admitidos esos recursos. Asi es que no es permitido al Tribunal *adquem*, una vez admitidos, conocer de la calificación del grado hecha por el Tribunal á quo. De la responsabilidad de este es esa calificación; y solo comprometiendo seriamente la de aquel, pueden confirmarse ó revocarse las resoluciones que en materia tan delicada se dicen, admitido el recurso de apelacion, ó el de súplica, ó el de nulidad, deben sustanciarse en la forma legal, sin que por mas que salte á la vista su improcedencia, pueda hacerse ninguna declaracion en su contra.

En el caso, hay que tener presente estos principios que forman en conjunto una verdad innegable en la jurisprudencia, y decidir por ellos que nada, absolutamente nada puede resolverse sobre la admision del recurso de súplica interpuesto por el Señor Gandarillas. El fué admitido y esto basta. Ocuparse en esta instancia del auto que le dió entrada, sería no solo extemporáneo, sino antijurídico. La ley no lo quiere, y tampoco la Sala puede hacerlo.

Pero si esto es así, tratándose de la procedencia del recurso, no sucede lo mismo respecto de su desercion. Cuando de autos apa-

rese que el que de él hizo uso, no lo ha mejorado en el término que al efecto se le designó, está en la facultad, y aun en la obligacion del superior, declarar que es de sierto y que la sentencia respecto de la que se interpuso, ha causado ejecutoria. Esto que se encuentra especialmente dispuesto en la legislación comun por la ley 3ª tít. 20 lib. 11 de la Nov. Recop., no pasó desapercibido para la especial de comisos, y muy al contrario, la pauta, de 28 de 1843, aplicable en el caso, por tratarse de comercio interior, y será á la que se ha sugetado la tramitacion del juicio, despues de fijar el término en que deba apelar la parte que se oreyere perjudicada por el fallo de primera instancia, dice en su artículo 45: que «el apelante presentará al Tribunal de segunda instancia dicho testimonio, el de la sentencia apelada y de la notificacion ó diligencia en que se apeló, que debe expedirse por el Juez inferior á las veinticuatro horas útiles, á lo mas, de haberlo recibido, á no ser que el Tribunal se hallase en otro lugar, pues entonces la apelacion se mejorará dentro de tantos dias cuantas sean las jornadas que distare un juzgado del otro, computándose cada jornada por cinco leguas.» Ya en su artículo 43 habia dispuesto la misma ley de 28 de Diciembre de 1843, que oportunamente se avisara por el superior al inferior, si el apelante ocurrió en tiempo á mejorar el recurso ó dejó de hacerlo, para que en este segundo caso, ejecutándose la sentencia, se dé cuenta con el expediente original «por haberse ejecutoriado el fallo.» Y en su artículo 46 ordena la repetida ley, «que se tendrá por consentida la sentencia y se llevará á puro y debido efecto, cuando no se ocurra por el apelante al Tribunal de 2ª instancia en el término designado.»

Por una analogia que no es contraria, sino antes bien muy conforme á las reglas de una buena interpretacion, tanto mas cuanto las razones que fundan un precepto para lo uno, proceden igualmente para lo otro, debe aplicarse lo dicho para la apelacion á

la súplica, y decidirse que siempre que en el término señalado, no la mejore ante quien corresponda el suplicante, se tendrá por abandonada, y por ejecutoriada la sentencia de 2ª instancia.

Y si pareciere injusta la apelacion por analogia, de las disposiciones de la pauta de comisos en los casos de apelacion á los de súplica, que no lo es, pues que el sentido natural y la misma ley lo autorizan, habria necesidad por ser punto omiso en esta, de ocurrir á las prevenciones comunes con arreglo al principio que establece que, en los puntos en que guarden silencio las legislaciones especiales, se esté á lo dispuesto para los mismos en general.

Ahora bien, la ley vigente en los tribunales federales para los procedimientos que no son de comiso, y para los demás que no esten reglamentados por una calificación privativa, es, en materia de mejora de apelacion y de súplica, la citada del tít. 20, lib. II de la Nov. Recop. Ella dispone que «seguir debe el alzada la parte que se alzare, al plazo que le pusiere el Juzgador, y parecer con el proceso ante el Juez de las alzas..... y en este tiempo no lo quiciere seguir, ó no se querellare, como dicho es, finque firme el juicio de que se alzan en estos plazos que dicho son.....»

Mas terminante no puede ser en la parte conducente, esta disposicion, y seria inútil decir otra cosa respecto del punto de que se ocupa.

Prévias estas consideraciones que son de explorado derecho, el procurador encuentra en los presentes autos, que el C. Gandarillas, que aparece como suplicante en ellos, ha perjudicado notoriamente el recurso que ahora sostiene. En efecto, admitida la súplica por auto del Tribunal de Circuito de 14 de Diciembre del año próximo pasado, se le fijó el término de diez dias para que se presentara ante esta superioridad á continuarla, cuyo término comenzó á correr, segun el propio auto, desde su notificacion. Esta se hizo por el Juez letrado de San Juan

del Rio, domicilio entonces de Gandarillas, comisionado por el Tribunal de Circuito de Querétaro, quien á su vez fué exhortado por el de igual clase de Durango, en 5 de Enero del corriente año; de modo que, el plazo dentro del cual debió ocurrir el suplicante á esta Corte, concluyó, exceptuando los dias feriados, el 16 del mismo mes de Enero. Ahora bien, en esto toca consta que, Gandarillas se presentó mucho despues de ese dia, pues que lo hizo el 19 de Febrero como puede verse en la foja 15, en la que aparece un escrito firmado por el agente de negocios D. Angel Islas, solicitando este se le tenga por presentado como representante de Gandarillas, cuyo poder exhibió, y se le manden entregar los autos para instruccion de su patrono, y para promover lo conveniente. Asi es que, basta micotejo de fechas, para persuadirse de que fuera del término, y con exeso, forzoso es repetirlo, se presentó el personero de Gandarillas, y que por lo mismo debe darse por desierta la súplica, de conformidad con el tenor literal de las disposiciones citadas. Y esto es tanto mas procedente, cuanto que la intencion que en un principio manifestó Gandarillas, fué la de no proseguir el recurso, pues como se lee en la notificacion que se le hizo por el Juzgado de San Juan del Rio, (fojas 19 vuelta,) se limitó á pedir á la Corte Suprema proveyera con justificacion, por no poder por falta de recursos trasladarse á esta Capital, ni mucho menos nombrar apoderado. Si entonces fué ese su intento, no lo es permitido arrepentirse de él, porque en buenos principios importa un desistimiento, y si dispuesto estaba á dar este por no hecho, debió presentarse en término, y no pasado el que se señaló. Asi lo quiere la ley, fundada, como en otra ocasion lo ha dicho el que suscribe, en una presuncion juris, en la de no ser de la voluntad de un litigante continuar un recurso, cuando deja trascurrir el tiempo que indispensablemente necesita para ello, presuncion que en el caso reúne además del lapso del término, la manifestacion

de que se ha hecho mérito, y que el interesado hizo al contestar la referida notificación.

Bien es cierto, el Procurador debe ocuparse de esto para prevenir un argumento, que en 20 de Enero último pidió el que suscribe á la Sala que se señalara un término prudente al C. Gandarillas, para que ocurriera á continuar la súplica; pero también lo es, que tal petición descansó en una base que si entonces pudo ser cierta, hoy ha dejado de serlo: en la de no constar en el Toca haberse hecho la notificación correspondiente del auto de 14 de Diciembre próximo pasado, del Tribunal de Circuito, en el que se fijaron diez días para la mejora del recurso. Una vez que por las diligencias remitidas después por el Tribunal, aparece que esa notificación se hizo, y que se hizo en la forma debida, ella ha surtido todos sus efectos y lo que por su falta se había pedido y aun decretado, es de tenerse como no existente, puesto que ha dejado de existir también el fundamento único en que se apoyó.

Por lo expuesto, el Procurador pide á la Sala se sirva fallar el artículo pendiente, resolviendo:

Primero. Que por falta de jurisdicción, no es de declararse como lo pretende la parte de los señores Gonzalez Treviño y Compañía, que el recurso de súplica interpuesto por el señor D. Buenaventura Gandarillas, ex-gefe de Hacienda del Estado de Chihuahua, respecto de la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Durango, en los autos á que hace referencia este Toca, fué mal admitido.

Segundo. Que por no haber sido mejorado en tiempo oportuno, debe darse por desierto el mismo recurso.

Tercero. Que por esto y por haberse conformado el representante fiscal y la parte demandada con ella, ha causado ejecutoria la dicha sentencia.

Cuarto. Que se remitan para su ejecución las actuaciones al Tribunal de su procedencia,

cuidando la Secretaría de que se cancelen en éste Toca que se archivará, las estampillas correspondientes al papel común que en él aparece.

México, Abril 6 de 1875.—Lozano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 4 de 1875.

Visto el juicio seguido por la Jefatura de Hacienda de Chihuahua contra la casa Gonzalez Treviño y C^a del comercio de esa Ciudad, por haber introducido á la misma, procedentes de la plaza de Monterrey, dos bultos ropa, sin los documentos que debidamente legalizaran su internacion. Vista la sentencia de 1^a instancia, dictada por el Juez de Distrito de dicho Estado, de 8 de Mayo de 1873, la de 2^a pronunciada por el Tribunal de Circuito de Durango, en 29 de Junio del año próximo pasado y de la cual suplico el C. Buenaventura Gandarillas en su calidad de actor, como ex-Jefe de Hacienda del Estado de Chihuahua; lo pedido ante esta 1^a Sala por el C. Procurador General. Oído lo alegado al tiempo de la vista por el C. Lic. Francisco Gomez del Palacio, como patrón de la mencionada casa de comercio.

Considerando: que la ley 3^a tit. 21 Lib. 11 de la N. R., impone á la parte que interpone un recurso de esta naturaleza, la obligación de presentarse ante el Tribunal Superior que debe conocer de él dentro del término que le haya fijado aquel, de cuya sentencia se queja. Que D. Buenaventura Gandarillas lejos de dar cumplimiento á esa obligación, ha dejado pasar con exceso el plazo de diez días que le señaló el Tribunal de Circuito de Durango en su auto de 14 de Diciembre último. Que por lo mismo, es de darse por desierto el recurso; que supuesta esta declaración, sería inútil ocuparse del punto sobre si era ó no de admitirse ese mismo recurso; se declara de conformi-

dad en parte con el pedimento del Ministerio público:

Primero: Que es de darse y se dá por desierta la súplica interpuesta por D. Buenaventura Gandarilla, como ex-jefe de Hacienda del Estado de Chihuahua, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Durango en 29 de Junio del año anterior.

Segundo: que la dicha sentencia ha causado ejecutoria y debe producir los efectos respectivos.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de Durango, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa.* Oficial primero.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el Sr. D. Marcelino Gonzalez de Lopidana, á nombre de los Sres. D. Juan A. Redonet y otros, contra el Administrador de la Aduana de Mazatlan, que les exige en moneda de plata, con exclusion de la de cobre, el pago de la contribucion de 1 por ciento sobre capitales.

Pedimento del O. Promotor fiscal.

O. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado el presente juicio de amparo promovido por el Sr. Gonzalez de Lopidana, socio gerente de la casa J. de la Quintana y Cª, y en-

cuentra, que salva la circunstancia de no haber justificado el promovente su representacion por la Sra. Quintana y el Sr. Redonet, el presente juicio es idéntico al que el mismo Sr. Lopidana siguió en el año pasado de 1873 á nombre de la casa de que es gerente, y cuyo juicio sentenciado á su favor en 1ª instancia, lo fué igualmente por la Suprema Corte, causando ejecutoria.

El fiscal pues, para evitarse repeticiones inútiles, se refiere al juicio que ha mencionado, y suplica al Juzgado que teniendo á la vista se sirva fallar en el presente, siempre que se asegure la representacion del Sr. Lopidana, al menos con la caucion correspondiente, que la justicia de la Union ampara y protege á los representados del Sr. Lopidana, contra los actos del C. Administrador de la Aduana terrestre, que no quiere admitir en pago de la contribucion de 1% que les cobra, la moneda de cobre, que por diversas ejecutorias de la Suprema Corte y por el crédito y moralidad del Gobierno que la emitió, ha dispuesto que se admita en pago de impuestos y contribuciones. Así parece conforme á derecho.

Mazatlan, Octubre 15 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Mazatlan, Octubre 26 de 1874.

Vistos: El Sr. D. José Marcelino Gonzalez de Lopidana á nombre de los Sres. D. Juan A. Redonet, D. Martin Carcaga y Dª Teresa de la Quintana, se presentó pidiendo amparo contra el cobro que le hace el Administrador de la Aduana terrestre, de la suma de ciento cuarenta y seis pesos por el primero, cincuenta y un pesos por el segundo y noventa y tres pesos sesenta centavos por la tercera, á título de resagos de la contribucion extraordinaria de uno por ciento sobre capitales, decretada por el Gobernador y Comandante Mili-